

| | | |
|---|----------------------|---|
| EXPEDIENTE: RR.SIP.1480/2013 | Adriana Torres Ordaz | FECHA RESOLUCIÓN: 13/noviembre/2013 |
| Ente Obligado: Delegación Cuajimalpa de Morelos | | |
| MOTIVO DEL RECURSO: Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. | | |
| SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: Con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con los diversos 76 y 77 del mismo ordenamiento legal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. | | |

info^{df}

Instituto de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal



RECURSO DE REVISIÓN

RECURRENTE:

ADRIANA TORRES ORDAZ

ENTE OBLIGADO:

DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE
MORELOS

EXPEDIENTE: RR.SIP.1480/2013

En México, Distrito Federal, a trece de noviembre de dos mil trece.

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número **RR.SIP.1480/2013**, relativo al recurso de revisión interpuesto por Adriana Torres Ordaz, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se formula resolución en atención a los siguientes:

R E S U L T A N D O S

I. El cuatro de septiembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico “**INFOMEX**”, mediante la solicitud de información con folio 0404000111813, la particular requirió en **medio electrónico gratuito**:

“ ...

BUENOS DIAS SR. DELGADO [1] QUIERO SABER SI USTED TIENE CONOCIMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE ESTAN LLEBANDO A CABO EN LOS CENDIS ZENTLAPATL Y CENDI 37 TODAVEZ QUE SOLICITE COPIA DE LAS ACTAS ENTREGA O CUALQUIER DOCUMENTO EN DONDE SE FORMALIZO LA ENTREGA DE LOS CENDIS EN MENCIÓN A LO CUAL ME ENVIARON COPIA DE ACTAS CON DIVERSAS IRREGULARIDADES QUE SE DENOTA QUE SON HECHAS AL VAPOR Y **[2] QIERORO SABER SI DE ESTA IRREGULARIDAD TIENE CONOCIMIENTO LA CONTRALORIA INTERNA** YA QUE AL CARGO DE LAS DIRECTORES DE AMBOS CENDIS TIENE A RESGUARDO TANTO NIÑOS COMO RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS **[3] QUIERO SABER QUE MEDIDAS VA A TOMAR EL RESPECTO.**”
(sic)

II. El diecinueve de septiembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico “**INFOMEX**”, mediante el oficio DSSAM/751/2013 de la misma fecha, el Ente Obligado remitió a la particular la respuesta a su solicitud de información, en los siguientes términos:



“ ...

Al respecto, por instrucciones superiores y por ser un tema que compete a mi área; con fundamento en lo establecido por los artículos 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito dar contestación a lo que se refiere:

- 1. Al respecto informo a usted, que el procedimiento de entrega de los Cendis Zentlapatl y 37; se efectuó de acuerdo a lo establecido en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Publicada el 29 de junio del 2009, dentro de las Normas Generales para la Prestación del Servicio Educativo Asistencial en los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales del Gobierno del Distrito Federal, en su Capítulo I Disposiciones Generales; Capítulo VIII de las Funciones Genéricas de los Responsables de los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales; Asimismo en el Anexo I Educación Inicial, Reportes Administrativos que deben rendir los Directores y los Docentes de las Escuelas de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos en el Distrito Federal (RH-09 Ciclo Escolar 2012-2013. Publicado por la SEP.*

Dado que las actas están fundamentadas conforme a lineamientos actuales y no hay irregularidades, no es necesario dar parte a contraloría.

En cuanto a las mediadas a tomarse; se realizará una supervisión permanente sobre el funcionamiento de todos los CENDI's de la demarcación y se asesorará de manera constante a las Directoras sobre funciones inherentes a su cargo. ...” (sic)

III. El veinticuatro de septiembre de dos mil trece, la particular presentó recurso de revisión expresando su inconformidad con base en el siguiente agravio:

“la información que me fue entregada no concuerda con la información solicitada, ni lo establecido en la gaceta del 29 de junio del 2009 a la que hacen alusión pero lo que viene en la gaceta no tiene que ver con la información que yo solicite... Se me envía información que no solicite... Violenta mi derecho a ser informada” (sic)

IV. El treinta de septiembre de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0404000111813.



Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado.

V. El once de octubre de dos mil trece, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, mediante el oficio DC/OIP/514/2013 del diez de dos mil trece, a través del cual manifestó lo siguiente:

- Mediante el oficio DC/OIP/479/2013 se turnó la solicitud de información al Director General de Desarrollo Social de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por ser de su competencia ya que era la Unidad Administrativa que detentaba la información.
- Mediante el oficio DSSAM/787/2013 del siete de octubre de dos mil trece, el Jefe de la Unidad Departamental de Servicios Sociales y Centros de Desarrollo Infantil, emitió respuesta a la solicitud de información y puso a disposición de la ahora recurrente la información solicitada.
- Invocó que se actualizaba el supuesto que señala el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitando que se declarara el sobreseimiento que hacía referencia dicho precepto legal.
- Solicitó la confirmación de la respuesta emitida.

Asimismo, a su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos:

- Acuse del oficio DC/OIP/479/2013 del cuatro de octubre de dos mil trece, mediante el cual se remitió al Director General de Desarrollo Social el expediente que se atiende.
- Oficio DSSAM/787/2013 del siete de octubre de dos mil trece, emitido por el Jefe de la Unidad Departamental de Servicios Sociales y Centros de Desarrollo



Infantil de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por el que daba contestación nuevamente a la información solicitada.

- Correo electrónico del diez de octubre de dos mil trece, mediante el cual se le notificó a la ahora recurrente la segunda respuesta emitida por el área que detentaba la información.

VI. Mediante acuerdo del quince de octubre de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le fue requerido y la segunda respuesta, y admitió las pruebas ofrecidas.

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista a la recurrente con el informe de ley y la segunda respuesta rendidos por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

VII. El treinta de octubre de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley y la segunda respuesta rendidos por el Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos.



VIII. Mediante acuerdo del once de noviembre de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de que las pruebas agregadas expediente consisten en documentales, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal es competente para resolver el presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior.

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de



improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que a la letra señala:

Registro No. 168387

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVIII, Diciembre de 2008

Página: 242

Tesis: 2a./J. 186/2008

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que **las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público**, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia **subsiste el principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el apelante**, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación.

Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García.

Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.



Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado invocó que se actualizaba el supuesto que señala el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitando que se declarara el sobreseimiento a que hacía referencia dicho precepto legal, sin hacer un sólo argumento o demostración alguna que lo acreditara y, por el contrario, contraponiéndose con su solicitud de confirmarse la respuesta impugnada.

En ese sentido, dado que las causales de improcedencia y de sobreseimiento deben ser demostradas plenamente por el Ente Obligado y no inferirse por medio de presunciones, como lo ha establecido el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Tesis aislada, el sólo hecho de solicitar a este Instituto que sobreseyera el recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no es suficiente para resolver de esa manera, pues es necesario que el Ente Obligado demuestre las razones y circunstancias que actualizan dichas causales, dicha Tesis dispone lo siguiente.

Registro No. 161585

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXIV, Julio de 2011

Página: 2062

Tesis: I.9o.A.149 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICEN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN PRESUNCIONES.

De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en presunciones. En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las causales de improcedencia tienen la misma naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de orden público y de estudio preferente, debe operar también la misma regla; por lo que, para que éstas se actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario que se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base en presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza una hipótesis de improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia de ello, es necesario que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas necesarias para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la consecuencia sería no analizar el fondo del asunto.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla.

En ese orden de ideas, no pasa desapercibido para este Instituto de la simple lectura del oficio DSSAM/787/2013 notificado durante la substanciación del presente recurso de revisión, que el Ente recurrido emitió una segunda respuesta con la que pretendió satisfacer el contenido de la solicitud de información que dio lugar al presente medio de impugnación, sin embargo, resulta de particular importancia tener en cuenta que la recurrente se inconformó porque el Ente Obligado le entregó información diferente a la que requirió, argumentando que el área que respondió remitió información que no concordaba con lo solicitado ya que hacía alusión a la Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintinueve de junio de dos mil nueve, misma que no tenía que ver con la información, transgrediendo su derecho a la información, habiéndole solicitado lo



siguiente: *BUENOS DIAS SR. DELGADO [1] QUIERO SABER SI USTED TIENE CONOCIMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE ESTAN LLEBANDO A CABO EN LOS CENDIS ZENTLAPATL Y CENDI 37 TODAVEZ QUE SOLICITE COPIA DE LAS ACTAS ENTREGA O CUALQUIER DOCUMENTO EN DONDE SE FORMALIZO LA ENTREGA DE LOS CENDIS EN MENCIÓN A LO CUAL ME ENVIARON COPIA DE ACTAS CON DIVERSAS IRREGULARIDADES QUE SE DENOTA QUE SON HECHAS AL VAPOR Y [2] QIERORO SABER SI DE ESTA IRREGULARIDAD TIENE CONOCIMIENTO LA CONTRALORIA INTERNA YA QUE AL CARGO DE LAS DIRECTORES DE AMBOS CENDIS TIENE A RESGUARDO TANTO NIÑOS COMO RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS [3] QUIERO SABER QUE MEDIDAS VA A TOMAR EL RESPECTO.*

En ese sentido, después de analizar las constancias que integran el presente expediente, este Instituto considera que podría actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; en relación con los diversos 76 y 77 del mismo ordenamiento legal, **lo que implicaría que el presente recurso de revisión no cumple con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio del fondo del asunto o de la controversia planteada, como lo es la existencia de una solicitud de información y, en consecuencia, su estudio es preferente a la causal referida por el Ente Obligado.**

Sirven de apoyo a lo anterior, las Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales se citan a continuación:

*Época: Novena Época
Registro: 194697
Instancia: PRIMERA SALA
Tipo Tesis: **Jurisprudencia***

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Tomo IX, Enero de 1999

Materia(s): Común

Tesis: 1a./J. 3/99

Pag. 13

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 **prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente.** Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.

PRIMERA SALA

AMPARO EN REVISIÓN 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García.

Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González.

Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León.

Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Mario Flores García.

Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández.



Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Época: Octava Época

Registro: 210856

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Tipo Tesis: Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Localización: Tomo XIV, Agosto de 1994

Materia(s): Común

Tesis: I. 3o. A. 135 K

Pag. 619

IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACION CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMAS CAUSALES. *Si bien es cierto que el artículo 73 de la Ley de Amparo prevé diversas causales de improcedencia que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio sin analizar el fondo del asunto, ello no significa que todas esas causales de improcedencia que pueden surtirse en el juicio constitucional sean de la misma preferencia en su análisis para su actualización, pues existen algunas de estudio preferente a otras. Así la fracción XVIII del precepto antes citado, permite la actualización de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente en las 17 fracciones anteriores que contiene el propio artículo, pueden derivarse de alguna otra disposición de la propia ley. De esta manera, relacionando el artículo 21 de la ley de la materia, con la fracción XVIII del multicitado artículo 73, se da la posibilidad jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo ante el órgano judicial, para que éste determine si la presentación de la demanda de garantías está dentro del término que establece el artículo 21 o 22 de la Ley de Amparo, según sea el caso, y poder admitir a trámite la demanda respectiva, o bien, examinar, si no se actualiza otra diversa causal de improcedencia, el fondo del asunto. Esta causal de improcedencia que se contiene en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, es de análisis preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En cambio, si la acción se ejercitó dentro del término legal que establece la ley de la materia entonces el juzgador está en posibilidad legal de determinar si la acción intentada cumple o no con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio del fondo del asunto o de la controversia planteada, como es la legitimación del promovente, el interés jurídico, que no exista recurso ordinario pendiente de agotar, que el*



acto reclamado no está consentido, etc.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 403/94. Degussa de México, S.A. de C.V. 14 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.

De ese modo, previo al estudio de la causal de referencia, resulta pertinente señalar que de conformidad con lo indicado en el formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” y en atención a los antecedentes obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX”, el presente recurso de revisión cumplió con los requisitos formales establecidos por el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dispone:

Artículo 78. *El recurso de revisión podrá interponerse dentro de los quince días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada.*

...

El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- I. Estar dirigido al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal;*
- II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero interesado, si lo hubiere;*
- III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de carácter personal se harán por estrados;*
- IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la Autoridad Responsable del mismo;*
- V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77.*
- VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el acto o resolución impugnada; y*



VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar copia de la iniciación del trámite.

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere procedente hacer del conocimiento del Instituto.

Se afirma lo anterior, porque en relación con el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, del análisis de las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX” relativas a la solicitud de información con folio 0404000111813, específicamente del formato denominado “Avisos del sistema”, se advierte que la respuesta impugnada fue notificada mediante el propio sistema el diecinueve de septiembre de dos mil trece, por lo que el plazo para interponer el presente medio de impugnación transcurrió del veinte de septiembre al diez de octubre de dos mil trece, descontando los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de septiembre, cinco, seis, doce, trece y diecinueve de octubre de dos mil trece por tratarse de días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 0121/SO/13-02/2013, mediante el cual se aprueban los días inhábiles del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, correspondientes al dos mil trece y enero de dos mil catorce para efectos de los actos y procedimientos que se indican competencia de este Instituto. De ese modo, el presente recurso de revisión fue presentado en tiempo, pues fue interpuesto el veinticuatro de septiembre de dos mil trece.

Por otra parte, también se reúnen los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que:

- I. El escrito inicial estaba dirigido al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal e incluso fue interpuesto a través del sistema electrónico “INFOMEX”.



- II. Indicó el nombre de la recurrente: Adriana Torres Ordaz.
- III. Señaló domicilio para oír y recibir notificaciones.
- IV. De los apartados “Acto o resolución impugnada” y “Descripción de los hechos del acto o resolución que impugna”, se advierte que la recurrente impugnó la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos con motivo de la solicitud de información con folio 0404000111813.
- V. De las constancias del sistema electrónico “INFOMEX”, se advierte que la resolución impugnada le fue notificada a la ahora recurrente el diecinueve de septiembre de dos mil trece.
- VI. Se mencionaron los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que causó el acto o resolución impugnada.
- VII. En el sistema electrónico “INFOMEX” se encontraba la respuesta impugnada, así como las documentales relativas a su notificación mediante el propio sistema.

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis aislada:

Registro No. 163972

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXII, Agosto de 2010

Página: 2332

Tesis: I.5o.C.134 C

Tesis Aislada

Materia(s): Civil

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica

realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

En ese orden de ideas, el presente medio de impugnación resultó admisible porque cumplió los requisitos formales previstos en el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Por otra parte, resulta necesario citar lo dispuesto por los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establecen los supuestos en que puede interponerse el recurso de revisión:

Artículo 76. *El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo.*

Artículo 77. *Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas:*

- I. La negativa de acceso a la información;*
- II. La declaratoria de inexistencia de información;*
- III. La clasificación de la información como reservada o confidencial;*
- IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato incomprensible;*
- V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información;*
- VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud;*



VII. Derogada.

VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos establecidos en esta Ley;

IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y

X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o carente de fundamentación y motivación.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja ante los órganos de control interno de los Entes Obligados.

Ahora bien, del análisis conjunto de los artículos citados, se advierten tres elementos necesarios para que el recurso de revisión sea procedente:

1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, el particular, que en términos del artículo 4, fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es: *Toda persona que pide a los Entes Obligados Información.*
2. La existencia de una solicitud de información.
3. La existencia de un acto recurrible por esta vía, es decir, una respuesta emitida por un Ente Obligado con motivo de una solicitud de información respecto de la cual se tenga una inconformidad, o bien, la omisión de respuesta por parte del Ente.

Ahora bien, en la solicitud de información que dio origen al presente recurso de revisión, la ahora recurrente requirió conocer "... **BUENOS DIAS SR. DELGADO [1] QUIERO SABER SI USTED TIENE CONOCIMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE ESTAN LLEBANDO A CABO EN LOS CENDIS ZENTLAPATL Y CENDI 37 TODAVEZ QUE SOLICITE COPIA DE LAS ACTAS ENTREGA O CUALQUIER DOCUMENTO EN DONDE SE FORMALIZO LA ENTREGA DE LOS CENDIS EN MENCIÓN A LO CUAL ME ENVIARON COPIA DE ACTAS CON DIVERSAS IRREGULARIDADES QUE SE**

DENOTA QUE SON HECHAS AL VAPOR Y [2] QUIERO SABER SI DE ESTA IRREGULARIDAD TIENE CONOCIMIENTO LA CONTRALORIA INTERNA YA QUE AL CARGO DE LAS DIRECTORES DE AMBOS CENDIS TIENE A RESGUARDO TANTO NIÑOS COMO RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS [3] QUIERO SABER QUE MEDIDAS VA A TOMAR EL RESPECTO.”

De ese modo, a fin de definir la naturaleza de la información, a efecto de determinar si se actualiza el segundo de los supuestos normativos referidos, como lo es la existencia de una solicitud de información, es preciso atender a lo dispuesto en los artículos 1, 3, 4, fracciones III, IV y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales señalan:

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el territorio del Distrito Federal.

*El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; **tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión** de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar información pública.*

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

...

III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, en los términos de la presente Ley;

IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión



de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

...

IX. Información Pública: *Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido;*

...

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:

- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal tiene por **objeto transparentar el ejercicio de la función pública**, además de **garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión** de los entes obligados.
- El **derecho de acceso a la información pública** es la libertad que tiene **toda persona para acceder** a la información **generada, administrada** o en **poder** de los **entes obligados**.
- Toda la información **generada, administrada** o en **posesión** de los entes obligados se considera un bien de dominio público, **accesible a cualquier persona**.
- **Información Pública** es todo **archivo, registro** o **dato contenido en cualquier medio, documento** o **registro** impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en poder de los entes obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar y que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido.
- Son **documentos** los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración.



- Los **documentos** podrán **estar en cualquier medio**, entre otros escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.

En ese sentido, resulta válido afirmar que el **derecho de acceso a la información pública** es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los entes obligados información pública, entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los entes obligados o que **en ejercicio de sus atribuciones** tengan la obligación de generar, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada información de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades.

Además, resulta preciso destacar que la información pública como documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y estadísticas. Ello significa que el ejercicio del derecho de acceso a la información será operante cuando el particular solicite cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones de los entes obligados, en su caso, administrados o en posesión de los mismos.

Ahora bien, para el mismo propósito de exponer si el requerimiento de la ahora recurrente es susceptible de ser satisfecho vía acceso a la información pública, es indispensable traer a colación los artículos 9, fracción IV y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales establecen lo siguiente:



Artículo 9. *La presente Ley tiene como objetivos:*

...

IV. Favorecer la **rendición de cuentas**, de manera que se pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados;

...

Artículo 26. *Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.*

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:

- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, tiene entre otros objetivos el **favorecer la rendición de cuentas**, con la finalidad de evaluar el desempeño de los entes obligados.
- A fin de beneficiar la **rendición de cuentas**, los entes están obligados a proporcionar a cualquier persona la información que les sea requerida relacionada con el **funcionamiento y actividades** desarrolladas por éstos.

De ese modo, de los artículos en mención, se concluye que los entes obligados, además del deber que tienen de conceder el acceso a la información pública a través de **“documentos”**, también deben brindar a cualquier persona la información que se les requiera sobre el **funcionamiento y actividades** que desarrollan a fin de favorecer la rendición de cuentas, entendida como la obligación de todos los servidores públicos y los políticos de informar sobre sus acciones.

Eso es así, ya que a partir de la **rendición de cuentas**, se cumple el deber de los entes obligados de informar sobre sus decisiones y justificarlas en público, y por otro, la oportunidad de sancionar a los servidores públicos que hayan faltado a sus obligaciones en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.



De conformidad con el contenido de las disposiciones legales antes citadas (que califican la naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información pública), y después de analizar el requerimiento formulado por la ahora recurrente en su solicitud de información, se advierte que no pretendió acceder a información pública contenida en algún **documento, registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico**, generado en función de las atribuciones del Ente Obligado, administrada o en posesión del mismo, sino pretendió que el Ente recurrido absolviese posiciones, reconociendo la conductas supuestamente irregulares planteadas que podrían implicar para dicho Ente consecuencias jurídicas.

Lo anterior es así, porque de la simple lectura del texto de la solicitud de información, se desprende que la particular utilizó el sistema electrónico “INFOMEX” para obtener del Ente recurrido **si el Jefe Delegacional tenía conocimiento de las presuntas irregularidades que se estaban llevando a cabo en los Centros de Desarrollo Infantil Zentlapatl y 37, así como si tenía conocimiento la Contraloría de dichas supuestas irregularidades y saber qué medidas iba a tomar el respecto** (pronunciamiento éste último que implica el reconocimiento previo de las presuntas irregularidades), lo que en ningún modo significa que su intención haya sido conocer información pública, puesto que la ahora recurrente emitió un juicio de valor que resultó en un requerimiento tendencioso que no es susceptible de ser satisfecho bajo ninguno de los dos esquemas expuestos previamente.

Eso es así, toda vez que el **pronunciamiento que pretendió la particular que emitiera el Ente Obligado** sobre una determinada situación, no se encontraba comprendido en algún **archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro**, es decir, no estaba requiriendo la entrega de **información generada, administrada o en posesión del Ente recurrido**, sino que al dar un



calificativo y una característica particular a la información que pretendió obtener (a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública) el reconocimiento de lo que a su juicio eran irregularidades en los Centros de Desarrollo Infantil señaladas en su solicitud, la ahora recurrente soslayó que si ella consideraba que existieron irregularidades en las actas de entrega y recepción era una circunstancia que, si bien pudiese encerrar el deber de conceder el acceso a todos los datos necesarios a fin de evaluar el desempeño del ejercicio público de ciertos servidores públicos, **ello no implicaba que el Ente recurrido se encontrara obligado a absolver posiciones, reconociendo la conductas irregulares planteadas por la particular que podrían implicar para dicho Ente consecuencias jurídicas.**

En ese sentido, es evidente que la solicitud de información que motivó la interposición del presente recurso de revisión no corresponde a un requerimiento susceptible de ser atendido por la vía de acceso a la información pública, puesto que no se está requiriendo la entrega de información generada, administrada o en posesión del Ente Obligado, y si bien pudiera relacionarse con el funcionamiento o las actividades específicas que desarrolla la Delegación Cuajimalpa de Morelos, no debe perderse de vista que para dar respuesta a un cuestionamiento de la naturaleza señalada implicaría el reconocimiento de una circunstancia de hecho bajo los supuestos expuestos por la ahora recurrente.

En consecuencia, es claro que al realizarse un requerimiento como el presentado por la ahora recurrente al amparo del derecho de acceso a la información pública, el Ente Obligado no tiene el deber a atenderlo pues ese derecho no puede ampliarse al grado de obligar a los entes a absolver posiciones acorde a los intereses de los particulares.



Lo anterior, conlleva a determinar que en estricto sentido, la solicitud de la ahora recurrente no constituye en sus extremos una solicitud de información en ejercicio de ese derecho, pues sus apreciaciones y calificativos a la información que pretendió obtener no están considerados de manera alguna en las características y elementos que la normatividad de la materia estatuye para que determinada información sea considerada pública, y por lo tanto proporcionada a los particulares que por medio del ejercicio del derecho de acceso a la información requieran la misma.

En ese orden de ideas, este Instituto considera que no existen los elementos necesarios para la procedencia del recurso de revisión, previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues el requerimiento de la particular en realidad no constituye una *“solicitud de acceso a la información pública”* que esté regulada por la ley de la materia, y en consecuencia, la respuesta que le recayó no es recurrible a través del recurso de revisión.

De ese modo, en la interpretación de los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en sentido contrario, el recurso de revisión no procede en contra de las respuestas recaídas a requerimientos que no constituyen solicitudes de información, y aunque el artículo 83 de la ley de la materia no establece que dicho recurso es improcedente cuando se interponga contra una respuesta de esa naturaleza, resulta inevitable que cuando se haya admitido un medio de impugnación promovido contra una respuesta recaída a una solicitud que no es de acceso a la información pública, éste debe sobreseerse en la resolución definitiva, dado que la fracción III, del artículo 84 de la referida ley obliga a este Instituto a analizar la procedencia del recurso no sólo respecto de las hipótesis de improcedencia contenidas en el artículo 83 del mismo ordenamiento legal, sino de acuerdo al conjunto de



disposiciones que regulan el recurso de revisión en materia de acceso a la información pública, como son en este caso los artículos 76 y 77 de la citada ley.

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con los diversos 76 y 77 del mismo ordenamiento legal, resulta procedente **sobreseer** el presente recurso de revisión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:

R E S U E L V E

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con los diversos 76 y 77 del mismo ordenamiento legal, se **SOBRESEE** el presente recurso de revisión.

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado.



Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el trece de noviembre de dos mil trece, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.

**OSCAR MAURICIO GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO
PRESIDENTE**

**MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO
COMISIONADO CIUDADANO**

**DAVID MONDRAGÓN CENTENO
COMISIONADO CIUDADANO**

**LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA
COMISIONADO CIUDADANO**

**ALEJANDRO TORRES ROGELIO
COMISIONADO CIUDADANO**